

PROPUESTAS DE IZQUIERDA EN TIEMPO DE TRIBULACIONES

No es verdad que en 1972, cuando Nixon le pregunt? a Zhou Enlai su opini?n sobre la Revoluci?n Francesa, el l?der chino contestara que todav?a era demasiado pronto para valorarla. Seg?n parece, se entendieron mal. Zhou Enlai crey? que le preguntaban por Mayo del 68 y, sin saber qu? decir, se sali? por peteneras. Una pena. Porque, tambi?n esta vez, se escrib?a recto con los renglones torcidos: la respuesta, inapropiada para la sobredimensionada revuelta estudiantil, resultaba m?s que ajustada para referirse a los acontecimientos que consagraron para la civilizaci?n a aquel verano de 1789. La historia pol?tica de los dos ?ltimos siglos, y, por lo que parece, la que vamos a transitar en los tiempos m?s inmediatos no se entienden sino como una lucha por concretar institucionalmente el famoso lema acu?ado por los revolucionarios parisinos.

Por el lema en su versi?n extendida, el de los momentos de mayor fervor democr?tico, el mismo que figurar? en la tumba de Marat: «*Unit?e, Indivisibilit?e de la Republique, Libert?e, ?galit?e, Fraternit?e*». Completo e indivisible, incluida la olvidada apelaci?n a la unidad, porque, cuando est? asegurada la libertad, nadie es m?s que nadie en sus derechos y hay compromiso compartido con principios de justicia, no cabe amenazar con marcharse con lo que es com?n, de todos, el territorio pol?tico porque no nos gustan las decisiones que hemos aceptado democr?ticamente. Por eso, el 10 de mayo de 1793 la Convenci?n proclamar? «*l'unit?e et l'indivisibilit?e de la R?publique*». Sobre ese pie se sostiene, como se ver?, la justicia distributiva y, tambi?n, la defensa de una distribuci?n que es condici?n de la libertad ciudadana.

De los cuatro lemas, la igualdad ser? el de mayor recorrido. Y el que m?s desorden? el mundo mental de los protagonistas. Abundan los testimonios de c?mo la simple idea de juzgar a un rey abismaba las conciencias hasta de los m?s convencidos. No hab?a para menos. Tomarse en serio que se hab?an acabado los privilegios asociados a la sociedad estamental equival?a a inaugurar un mundo. La igualdad lo atravesaba todo. En 1789 la Asamblea Nacional, casi en las mismas fechas en que votaba la Declaraci?n de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprob? los llamados Decretos de Agosto cuyo nervio fundamental era la idea de que todos los franceses gozar?an de los mismos derechos y estar?an sujetos a las mismas leyes, sin lugar para las excepciones: «Todos los privilegios especiales de las provincias, principalmente condados, cantones, ciudades y comunidades de habitantes, ya sean financieros o de cualquier otro tipo, quedan abolidos sin indemnizaciones, y ser?n absorbidos dentro de los derechos comunes de todos los franceses». La ciudadanía ser? la concreci?n m?s cuajada del ideal igualitario. Todos deber?n tener los mismos derechos, y el primero, el derecho a hacerse o?r, al voto.

El destino ya no estaba atado al origen. Al contrario, hab?a un af?n de dinamitar la procedencia, de deshacerse de cualquier herencia. Como nos recordar? Tocqueville: «Nada omitieron con tal de hacerse irreconocibles». Se anticipaba ya el verso de *La Internacional*: «Del pasado hay que hacer a?nicos». La emancipaci?n que inauguraba el ideal de ciudadanía, que comenz? por atacar la tiran?a del origen, esa maldici?n que avecina a los nacionalismos con las sociedades estamentales, alcanzar? a los m?s imprevistos rincones de la vida social, desde los calendarios hasta los top?nimos. En nombre de la igualdad se querr? borrar las menores huellas del pasado. La carga de la prueba le corresponder? a quien se oponga a la igualdad. Cuando en los Decretos de Agosto de 1789 se afirmaba que «las distinciones sociales se basar?an solamente en la utilidad general», lo que ven?a a decir es que, de entrada, la apuesta era por la igualdad y, si acaso, lo que necesitaba justificaci?n era salirse de ese carril.

EL LARGO CAMINO DE LA IGUALDAD

A partir de ah? , el topo de la igualdad comenz? su andadura: si nacer en una familia no pod? otorgar privilegios, tampoco se ve? porque la falta de propiedad, el color de la piel o el sexo eran motivos para privar de la condici?n de ciudadano y, en particular, del derecho al voto. Y la historia no ten? porque parar ah?. Parafraseando la consigna que popularizaron los revolucionarios americanos, el germen que se estaba sembrando se puede condensar en el lema: ninguna desigualdad (es justa) sin responsabilidad. Dicho de otro modo: solo est?n justificadas las desigualdades que son resultado de las elecciones de los individuos. No parece justo que Tamara Falc? cobre 10.000 euros por (la suerte de) ser la hija de Isabel Preysler y, aun menos, que, cuando su madre se empareje por Vargas Llosa, duplique su cotizaci?n. Venir al mundo en una familia rica, en una parte de un pa?s o con algunas habilidades especiales no pod? justificar un acceso privilegiado a la educaci?n, la sanidad, la riqueza o el bienestar. Otra cosa es que el insensato temerario o el gandul vocacional quieran ingresar tanto como el trabajador sin tregua o el ahorrador prudente. Nadie merece premios o castigos por lo que le viene dado y, por lo mismo, cada cual ha de asumir las consecuencias de la vida que elige. Habr?a, por tanto, que compensar a aquellos menos dotados, marginados, v?ctimas de exclusiones o que han sufrido infortunios de los que no son responsables y, a los otros, enfrentarlos a las consecuencias asumidas de sus decisiones, a los retos que hab?an elegido. De nuevo, contra la tiran?a del origen.

No es menor la potencia del ideal igualitario. Sobre todo si se apuntala con la idea de responsabilidad, que sostiene tantas de nuestras valoraciones cotidianas: cuando optamos por «perdonar al que no sabe lo que hace» y encarcelar al criminal calculador; cuando premiamos los esfuerzos de los estudiantes; cuando condenamos a los que, pudiendo trabajar, viven del trabajo de otros sin su consentimiento directo o indirecto; cuando defendemos la democracia porque creemos que deben participar —esto es, ser responsables— todos los afectados por las decisiones; cuando reprochamos la complicidad, los votos o el silencio de tantos

durante tanto tiempo ante el miedo impuesto por los terroristas de ETA. En tales casos asumimos que la responsabilidad est? en el origen de premios y castigos, de retribuciones especiales o de sanciones morales. Mientras no aparezca, todos merecen un trato igual.

LA IGUALDAD CONSERVADORA

Est? tan extendida la intuici?n de ese par igualdad-responsabilidad que, a sabiendas o no, la comparten los conservadores-liberales cuando defienden una pacata igualdad formal de oportunidades —como carrera abierta a los talentos— y aun m?s cuando, al enfilarse contra el Estado del bienestar, lo acusan de paternalista, de entrometido y de pretender cuidarnos de la cuna a la tumba. La responsabilidad, el esfuerzo es lo que importa, nos dir?n. Est? justificado recompensar el esfuerzo individual y, tambi?n, abandonar a su suerte a los que, libremente, han elegido mal. Los individuos deben asumir las consecuencias de sus actos. El «pap? Estado», a?adir?n, no debe ocuparse de salvarnos de nuestros errores. Basta con el mercado, que reconoce el esfuerzo y el m?rito y castiga a los que se equivocan, a los que yerran en sus decisiones. En eso consiste la extraordinaria lucidez de la mano invisible, el ciego juez que, en el mar de la competencia, retribuye al buen panadero y penaliza al que lo hace mal: nadie se preocupa de recabar centralizadamente informaci?n sobre el empe?o de cada uno de los panaderos, basta con que, cada cual, incluidos los panaderos, se dejen llevar por sus propios intereses; nadie pierde el tiempo estableciendo penalizaciones, simplemente deja de ir a la mala panader?a porque acude a la buena.

La argumentaci?n conservadora se completar? con un supuesto de discontinuidad institucional y hasta moral entre el mercado y el Estado, que asoma en la trastienda de frases como «el Estado nos roba», «los impuestos son confiscatorios». El IRPF vendr?a a oficiar como un falso justiciero que nos arrebata lo leg?timamente nuestro, lo que merecemos, nuestro precio (salario) de mercado, que coincide con lo que aportamos, dir?n los m?s arriesgados

defensores de la teor?a de la productividad marginal. El mercado ser?a lo natural y lo debido; el Estado, el artificio y lo arbitrario. La tesis, todo sea dicho, es muy consistente con una visi?n prepol?tica de los derechos: los derechos ser?an anteriores e independientes de la voluntad pol?tica de los ciudadanos cristalizada en leyes. Los derechos, incluido el de propiedad, ser?an tan naturales como la trayectoria de los planetas. Si acaso, mediante leyes e instituciones, nosotros nos limitar?amos a tomar nota, modestos notarios de valores trascendentes, inmutables desde el principio de los tiempos.

El supuesto conservador de discontinuidad resulta m?s que discutible. El mercado, y m?s el mercado capitalista, se sostiene sobre una trama institucional, pol?tica, previa, que asegura unos derechos de propiedad, un mecanismo garantizado de intercambios leg?timos, todo ello respaldado por un (costoso) sistema judicial y policial. M?s exactamente: 1) la propiedad *precisa* de un sistema legal que la sostenga y, sobre todo, en sociedades complejas, no hay nada parecido al *laissez faire*: el mercado requiere de un Estado, que hace posible t?tulos de propiedad, sistemas de ejecuci?n de contratos; 2) la propiedad es una construcci?n jur?dica que no preexiste en ning?n sentido al sistema de normas, entre las que se incluyen las que fijan impuestos: no hay una propiedad previa a los impuestos porque los impuestos forman parte de las normas que la definen. Yo no te puedo arrebatar tu casa porque soy m?s fuerte, ande m?s necesitado o tenga la sangre azul. Tendr? que compr?rtela y t? deber?s estar de acuerdo. No hay una distribuci?n «natural» y justa, la del mercado, que luego se «ensucia» a trav?s de impuestos artificiales e injustos. Todos los derechos, tanto los llamados «derechos negativos», esos que garantizan la libertad de opini?n o la propiedad, como los llamados «positivos», los sociales, que protegen la asistencia y el bienestar, cuestan dinero y es una decisi?n pol?tica, colectiva, garantizarlos en mayor o menor grado y establecer prioridades entre unos y otros. La idea de que la distribuci?n del mercado es la correcta, de que el mercado garantiza a cada uno lo que merece, am?n de presumir unos supuestos de teor?a econ?mica que no est?n fuera de disputa y que permitir?an reconocer qu? aporta cada cual a los empe?os productivos, asume una idea de justicia que no es incondicionalmente

incontrovertida. Al cabo, a todos nos parecería inhumano abandonar a su suerte a los ni?os, los ancianos o los discapacitados «porque, puesto que no aportan nada, no deben recibir nada».

De todos modos, ni siquiera hace falta ir tan lejos. Y es que, si hay algo seguro, es que el instrumento de tasaci3n de los conservadores, el mercado, no parece bien calibrado para medir m?ritos y esfuerzos. Basta con saber en qu? familia viene cada cual a este valle de l?grimas para poder anticipar con precisi3n de ge3metra como le ir? en la vida. Entre otras cosas por fen3menos como el llamado «emparejamiento selectivo», que lleva a los ricos a casarse con ricos. Padres ricos tienen hijos que ser?n ricos y los pobres, pues pobres. Tanto da que se trate de imb3ciles irreparables o haraganes vocacionales como genios de Nobel o esforzados estajanovistas. De vez en cuando alguno se sale de cauce y aparece en las revistas de las peluquer?as, pero no hay que engañarse: premiar ?nicamente esfuerzos o talentos, la m?nima idea de igualdad de oportunidades, no forma parte del gui3n que rige nuestras sociedades. Sobre eso caben pocas dudas y menos despu?s de los datos sistematizados en *El capital en el siglo XXI*, el famoso ensayo de Thomas Piketty. Entre las muchas discusiones que ha desatado el publicitado libro, ninguna invita a pensar que erraba el Pijoaparte, el protagonista de la novela *?ltimas tardes con Teresa*, cuando, melanc3licamente, se entregaba a la reflexi3n de que «lo mismo que el dinero, la inteligencia y el color sano de piel, los ricos heredan tambi?n esa sonrisa perenne, como los pobres heredan dientes ro?dos, frentes aplastadas y piernas torcidas».

La apelaci3n conservadora a la responsabilidad resulta de corto alcance e inconsecuente. Su igualdad de oportunidades no es m?s que una vaga invocaci3n que, en lo esencial, se limita dejar a cada cual concurrir en la carrera de la vida, sin atender a que algunos llegan a la l?nea de salida con un yunque atado al pie y otros con una panader?a debajo del brazo y, sobre todo, a que a partir de ah? todo a peor. Y esto no es una apreciaci3n moral, sino resultado sociol3gico irrefutable: desigualdades materiales vinculadas, por ejemplo, al origen familiar suponen otras desigualdades, sin ir m?s lejos en la esperanza de vida, que, entre unos y otros, incluso en la misma ciudad, pueden alcanzar a los treinta a?os.

Los problemas, hasta aqu, no alcanzan a la igualdad calibrada desde la responsabilidad sino al timorato arropamiento conservador: el camino no est igualmente franco para todos y no hay nadie —no desde luego el mercado— que vaya reconociendo mritos y esfuerzos. As las cosas, los problemas de la igualdad conservadora no debilitan la idea de igualdad, ms bien al contrario, en la medida que son problemas de inconsecuencia, la refuerzan.

Desafortunadamente, la historia no acaba aqu.

LAS COMPLICACIONES DE LA IGUALDAD

Los problemas de la igualdad estn en otra parte. En primer lugar, en el perfil de la idea: el trazo precisable entre elecciones y circunstancias que sostiene la idea de responsabilidad. Si la tesis no encuentra una traduccin prctica, operativa, de poco sirve. Y algo de eso hay. Caben escasas dudas de que no elegimos el color de la piel, el talento matemtico, el sexo o el infortunio de que nos desgracie un ladrillo descolgado de un edificio, al menos como elegimos un traje, una pareja, una inversin, una carrera universitaria o un refresco. Pero no siempre la distincin es tan fcil y menos an en estos tiempos en los que abunda una bien fundamentada tecnologa de la manipulacin de conciencias. Sobre todo cuando las tcnicas se aplican a consumidores o ciudadanos con la mala fortuna, social o natural, sobrevenida, de andar faltos de raciocinio y hasta de carcter, como, en diverso grado, somos casi todos. Y el problema se multiplica hasta hacerse inmanejable cuando las elecciones se entremezclan con las circunstancias, que es casi siempre: yo eleg entrar a un bar de bocadillos y encontr la mochila olvidada de la que result ser la mujer de mi vida. Me merezco la (buena o mala) suerte que es resultado de una eleccin, el premio de nmero de la lotera que compr porque «paseaba por all» o, en diciembre de 2004, cuando opt por quedarme en casa en lugar de irme de vacaciones a las costas de Tailandia o cuando en mi lejana juventud prefer estudiar un curso de telegrafista en lugar de un curso de inteligencia artificial o, el 10 de septiembre de 2001, cuando puse mis ahorros en una empresa dedicada a fabricar frmacos tranquilizan-

tes en lugar de en una agencia de turismo que organizaba vacaciones en Afganist?n? Y, claro, si no hay trazo limpio entre elecciones y circunstancias o si, aun pudiendo realizar el trazo, dif?cilmente podemos reconocer m?rito alguno a (las consecuencias de) las elecciones, se complica bastante hacer pol?tica igualitaria fundada en la responsabilidad.

Por otra parte, la idea no est? desprovista de implicaciones moralmente enojosas. Parece razonable que los ciudadanos no deban acudir en ayuda de empresarios o banqueros que han invertido a tontas y a locas, no solo por razones de eficacia, porque de otro modo, volver?n con m?s br?os al comportamiento insensato que tan rentable les sale, sino —que es lo que ahora nos interesa— por razones de principio, porque cada uno debe apechugar con las consecuencias de sus actos, porque, en nuestro paisaje moral compartido, parece asumido que cada palo debe aguantar su vela. Pero otras veces las cosas resultan m?s complicadas, al menos sin retortijones morales: ?dejamos abandonado al peat?n imprudente atropellado al cruzar una calle sin mirar, al fumador que desarrolla un c?ncer, al cooperante que en ?frica contrae una enfermedad?

El tercer avispero, y acaso el m?s importante, en tanto socava el ideal de ciudadan?a, ata?e a las consecuencias laterales de las intervenciones «compensatorias» de esos infortunios no achacables a la elecci?n de las personas. Sucede que las ayudas que, mal que bien, intentan resolver los problemas de las gentes, a la vez, las se?alan como «problem?ticas». En tal caso, la redistribuci?n o la transferencia ofician como estigmas sobre unos ciudadanos a los que se les viene a decir que, en el fondo, son unos desgraciados, bien porque resultan, en alg?n sentido, imperfectos, de f?brica, o in?tiles, porque son unos incapaces o porque sus habilidades no les importan a nadie y por eso no encuentran trabajo. Todos, al fin, una suerte de hijos tontos con los que los dem?s debemos apechugar. No solo eso, adem?s, si quieren recibir ayudas han de levantar el brazo y demostrar su condici?n de desechables, para decirlo con la repugnante adjetivaci?n colombiana. La dignidad ser?a el precio a pagar por la ayuda. Algo que, desde luego, es de mal llevar con el respeto, la autoestima y el trato digno, mimbres fundamentales de la trama ciudadana.

LOS PROYECTOS SOCIALISTAS

Pero acaso las mayores complicaciones ata?en al c?mo, al dise?o institucional con el que abordar la realizaci?n de la aspiraci?n igualitaria. La tradici?n socialista, la tradici?n m?s genuinamente continuadora de la Revoluci?n Francesa, lo intent? b?sicamente de tres maneras. La cl?sica, que no pas? de los papeles, entend?a el socialismo como continuaci?n inexorable del capitalismo por la v?a del desarrollo de las fuerzas productivas que, entre otras cosas, supon?a un horizonte de la abundancia. Una din?mica parecida a la que condujo del feudalismo al capitalismo, un conjunto de fuerzas, talentos y energ?as productivas constre?ido por un sistema, las relaciones se?oriales, que, al final, acaba por romper las bridas que impiden su crecimiento. Algo as?, pero a lo grande. Eso s?, una vez rotas las costuras del capitalismo, comienza jauja. Con abundancia, en una sociedad donde hay de todo para todos, desaparece hasta el terreno sobre el que se levanta el problema de la justicia distributiva: si cada cual puede tener lo que quiere no hay motivos de disputa ni, por lo mismo, preocuparse por c?mo asignar recursos. Se supera el test de la envidia: qu? me importa que t? tengas m?s o distinto de lo que yo tengo, si, de quererlo, tambi?n podr?a disponer de un lote como el tuyo. No es menester entretenerse en recordar, adem?s del talento intelectual de la argumentaci?n, su final sinsentido, siquiera porque, mientras no prescindamos de la termodin?mica y, a la vista, de la tecnolog?a previsible, no parece que ninguna sociedad humana pueda asumir la hip?tesis de la abundancia. Tampoco el capitalismo, que opera como si no fuera como ?l.

El segundo modelo, el que acabaría por cristalizar en el llamado socialismo real o socialismo de Estado, que se sosten?a en la propiedad p?blica de los medios de producci?n y la sustituci?n del mercado por la planificaci?n, se encontr? con serios problemas para resolver la coordinaci?n de los procesos econ?micos, para dotarse de un sistema de se?ales, de informaci?n, con el que gestionar con alguna eficiencia la asignaci?n de recursos. No era un asunto menor suplir al mercado. En el mercado, opera, al menos en el corto plazo, un conocido mecanismo: cuando un bien esca-

sea, su precio sube, a alguien le podr? interesar producirlo y la competencia le obligar? a hacerlo de la mejor manera. El sistema «libre» de intercambios, descentralizado, en el que cada uno va a la suya, mediante los precios, nos proporcionar?a, adem?s de los incentivos para producir, un procedimiento para conocer qu?, qui?n y cu?nto se quiere de cada mercanc?a. Por su parte, el socialismo se ve?a en serias dificultades para obtener unos precios en los que basar su planificaci?n. De poco serv?a la informaci?n que suministraban unas empresas que, para asegurarse que podr?an cumplir el plan central, cuando les preguntaban sobre sus posibilidades productivas, tiraban por lo bajo, y, cuando les preguntaban sobre los recursos que requer?an, ped?an lo que no est? escrito. Y tampoco andaban muy dispuestos a mejorar la productividad unos trabajadores cuyos empleos e ingresos estaban asegurados lloviera o tronara, se esforzaran o no.

Con m?s o menos convicci?n, con m?s o menos honestidad retrospectiva, a esas dificultades apelar?n los partidos socialdem?cratas cuando defiendan su modelo del Estado del bienestar sobre la base que sintetizar?a con eficacia insuperable el Partido Social Dem?crata alem?n en 1959 en su hist?rico congreso de Bad Godesberg: «Tanta competencia como sea posible, tanta planificaci?n como se necesite». En la pr?ctica, el lema se traduc?a en olvidarse tanto de la planificaci?n econ?mica como de la nacionalizaci?n de los medios de producci?n.

La intervenci?n p?blica estar?a justificada ?nicamente cuando el mercado no llegaba o no funcionaba debidamente. En primer lugar, para hacer frente a los diversos fallos del mercado (bienes p?blicos, externalidades, asimetr?as informativas, monopolios), esto es, situaciones, en las que el mercado, por s? solo, produc?a resultados ineficientes o, sencillamente, no produc?a determinados bienes, importantes, entre otras cosas, para garantizar el funcionamiento del propio mercado. Tamb?n hab?a lugar para una redistribuci?n justificada en nombre de la eficiencia, al menos si nos tom?bamos en serio los trabajos de Keynes y Kalecki, quienes nos recordaban que, puesto que en el capitalismo —donde unos ahorran y otros, por otras razones, son los que invierten— los aumentos en el ahorro no tienen por qu? traducirse en aumentos de la

inversi?n, si queremos asegurar que la demanda cumple su funci?n activadora, es mejor intervenir, bien directamente, a trav?s del gasto p?blico, bien indirectamente, redistribuyendo en favor de los pobres, que tienen una mayor propensi?n al consumo; esto es, que ante un aumento igual de la renta, destinan una proporci?n mayor a la demanda de bienes. La argumentaci?n que, todo hay que decirlo, solo funcionaba bajo ciertas condiciones, proporcionar? una anatom?a te?rica a la tesis de la redistribuci?n como el instrumento encargado de mediar entre unas cosas y otras, de compensar a los perdedores con transferencias procedentes de los ganadores.

Ese soporte te?rico parec?a un adecuado complemento con el que arropar el principio de igualdad antes expuesto: el Estado vendr?a a aliviar los males, los infortunios que a cada cual le caen, entre ellas, la edad, la enfermedad y el desempleo. Puesto que, y en esto se separaban de la mayor parte de los conservadores, el mercado, al menos el mercado capitalista, estaba instalado en disequilibrio, la eficiencia y la justicia distributiva se convert?an en los avales ?ltimos de las intervenciones bienestaristas de la socialdemocracia.

LOS L?MITES DE LA REDISTRIBUCI?N

El gui?n socialdem?crata atinaba al reconocer las virtudes del mercado como mecanismo coordinador de los procesos econ?micos con un razonable grado de eficiencia. Ning?n proyecto pol?tico sensato puede prescindir del mercado —que, por cierto, no equivale al capitalismo— al organizar la econom?a. Con el mercado hab?a que contar. Eso s?, si se trataba de procurar la igualdad, hab?a que llamar a otra puerta. El mercado est? en otra cosa, que poco tiene que ver con la justicia, ni, tampoco, *pace* los conservadores, con reconocer m?ritos o esfuerzos. Al menos, los mercados conocidos. Esa es tendencia de fondo del capitalismo, solo corregida, a ratos, como tambi?n nos ha recordado Piketty, antes por las destrucciones de capital derivadas de las guerras mundiales que por unas intervenciones redistributivas cuyos resultados finales,

cuando se les sigue el rastro completo, nunca acaba de estar claro a qui?n beneficia.

Por aqu? aparecen los problemas de la argumentaci?n socialdem?crata. Los economistas, con desigual complacencia, ya hab?an sostenido que los problemas del mercado no hac?an buenas las intervenciones p?blicas. Algunos recordaron que la teor?a keynesiana val?a ?nicamente en ciertas condiciones (econom?as cerradas) y otros que no todos los fallos del mercado presentaban soluciones p?blicas, al menos exclusivamente p?blicas. Pero lo preocupante, para lo que aqu? interesa, para el proyecto igualitario, era otra cosa, a saber, que la intervenci?n redistributiva ten?a efectos imprevistos e incluso, en muchas ocasiones, contrarios a los pretendidos. Para muestra, la ?ltima, la tercera v?a laborista y su fracaso a la hora de impedir, con redistribuciones *a posteriori*, que las desigualdades de salarios acaben en desigualdad de rentas. Sobra la evidencia de que, tambi?n esta vez, el infierno est? empedrado de buenos deseos: pa?ses que emplean casi una cuarta parte de su PIB en unos gastos sociales que, cuando se echan todas las cuentas, rara vez alcanzan por beneficiar a los m?s vulnerables, que escapan por las costuras de la sociedad, poco organizados para levantar la voz y desprovistos de informaci?n acerca de c?mo acceder a las ayudas y romper el c?rculo de su miseria.

Pero hay algo m?s y peor. Mientras las redistribuciones y transferencias dejan casi intactas las desigualdades importantes, a la vez, erosionan la calidad c?vica de la comunidad pol?tica. Sucede, en primer lugar, por lo directo, porque se muestran ineficaces para combatir la perpetuaci?n de profundas y sostenidas desigualdades y, por ende, para propiciar que los ciudadanos participen de retos y experiencias comunes. Cuando las vidas de unos tienen poco que ver con las de los otros, no hay espinazo democr?tico vertebrador de las sociedades. La democracia se sostiene, entre otras cosas, en la posibilidad de proporcionar razones que nuestros conciudadanos puedan dar como buenas. Darnos razones es lo m?nimo que mutuamente nos debemos. Algo que resulta improbable, cuando a las personas les resultan ininteligibles los problemas de sus conciudadanos, como al ciego le resulta extra?a la experiencia del color. Otro mecanismo por el que las redistribuciones erosionan la vida

cvica est relacionado con lo antes apuntando, con los torcidos destinos ltimos de las ayudas. Y es que, cuando se exploran hasta el detalle, se repara en que muchas de las asignaciones del Estado del bienestar no dependen de la calidad moral de las demandas, de su justicia, sino de la particular capacidad de influencia de los distintos grupos sociales, de su vigor para tironear del presupuesto. Grupos con dinero, bien organizados en las redes, con facilidad para fijar metas y coordinarse tendrn ms capacidad de hacerse ver que otros, sin recursos ni informacin, ajenos a las nuevas tecnologas o desperdigados. En esa disputa importan menos las buenas razones que el poder de influir o de movilizar votos, en una competicin en la que cada colectivo se preocupa de los suyos y sospecha de los dems, potenciales rivales en el reparto. Al otro lado solo estn unos polticos cuyo nico horizonte de supervivencia son las prximas elecciones y cuya salida ms normal es la huida hacia delante, unas veces encabalgando burbujas, otras con disequilibrios presupuestarios mantenidos en el tiempo, diversas maneras, que conocemos bien, de comprar la voluntad de unos votantes poco dispuestos a la vigilancia y al control mientras dura una fiesta que debern pagar los que vengan ms tarde, esos que hoy no votan. Y, finalmente, las cosas empeoran, por lo ya mencionado, porque los sensatos intentos de poner remedio a esas patologas y cenir las ayudas a los ms vulnerables, aparte de no resultar rentables electoralmente cuando los excluidos carecen de organizaciones sociales propias, se enfrentan a la incompresin de unos votantes con los instintos morales entumecidos por lo que se acaba de contar y que no tendrn reservas en estigmatizar a los otros, a los perdedores, descritos como parsitos, sometidos a una vejacin continua de tener que demostrar, si quieren recibir ayudas, que no sirven para nada, que son unos desgraciados o unos intiles a los que hay que compensar por ser lo que son, por su identidad.

LA PRIORIDAD DE LA CIUDADANA

El conjunto de circunstancias inventariadas, entre otras, est en el origen de un reajuste en la perspectiva con la que una parte

de la izquierda ha buscado renovar sus propuestas. Seg?n este diagn?stico, la estrategia cl?sica de dejar funcionar al mercado e intervenir m?s tarde para reparar sus patolog?as ha fracasado porque, en el camino hasta llegar a la redistribuci?n, se producen demasiadas distorsiones. Los mismos procedimientos que buscan conseguir la igualdad acaban por hacerla imposible o est?ril: incentivos perversos que llevan a los ciudadanos a abstenerse de colaborar porque «les suben los impuestos»; administraciones anquilosadas, cargadas de inercias e ineficiencias; complicaciones de la propia labor redistributiva, una tarea con altos costes y que requiere una informaci?n —sobre las distintas situaciones y necesidades de los ciudadanos— dif?cil de obtener; desigual capacidad de influencia, que sesga los recursos en favor de los poderosos y mejor organizados, quienes, bajo el paraguas de las buenas palabras bienestaristas, consiguen ayudas y subvenciones de cuestionable pertinencia moral cuando no simplemente parasitarias del presupuesto.

As? las cosas, las propuestas han optado por dar un paso atr?s, al principio, e intervenir antes de que comience a operar el mercado. Antes que remediar *ex post* los desordenes distributivos, se buscar?a prevenirlos *ex ante*. La idea es igualar, dotar de recursos, capacidades o poder a los ciudadanos y, sobre ese terreno, dejar funcionar al mercado. Una estrategia general que est? detr?s de diversas propuestas. Algunas resultan modestas y, en diverso grado, ya circulan: mejoras en educaci?n, en capital humano, porque «es mejor ense?ar a pescar que dar los peces»; pol?ticas activas de empleo y formaci?n continua de las capacidades laborales; medidas para conllevar la vida laboral y la familiar. Otras, m?s rotundas, buscan ampliar derechos pol?ticos y sociales y optan por alentar cambios institucionales que permitan a los dejados de la mano de Dios disponer de un mayor poder de negociaci?n, sea a trav?s de su participaci?n en los procesos de decisi?n, sea a trav?s de corregir desigualdades de poder que, en muchas ocasiones, llevan a distorsionar el funcionamiento del mercado. Por ejemplo, un banquero —incluso un banquero que simpatizase con los derechos civiles— de hace cincuenta a?os en Alabama se lo pensar?a mucho antes de contratar a un cajero negro ante el temor de que-

darse sin clientes. Y, por su parte, los clientes, ante la ausencia de empleados negros, confirmarían sus «impresiones» sobre la incompetencia o la deshonestidad de éstos. En tal caso, una política transitoria de discriminación positiva, que obligase a contratar un mínimo de empleados negros, rompería la cadena de exclusiones. Y quien dice negro dice otros grupos penalizados por características irrelevantes (edad, peso, sexo) para los empeños que han de realizar. Otras propuestas son aún más radicales, hasta incluir la distribución del capital productivo: democracias de propietarios y socialismos de mercado, fundamentalmente.

En ningún caso, o casi ninguno, tales propuestas pretenden acabar con el mercado, sino que, a partir de la constatación de que, por sí solo, no mejora las cosas o, directamente, las empeora, se opta por igualar las oportunidades con las que los ciudadanos operan en él y, si acaso, afinarlo en su funcionamiento para que ofrezca su mejor versión. Para ello se requiere una real igualdad de oportunidades, que permitiría un mejor uso de los recursos, incluidos los recursos humanos, y acabar con desigualdades de poder político o de influencia sobre el poder político, derivadas de desigualdades económicas, que entorpecen la buena asignación, y, por la vía de la capacidad de influencia en los gobiernos, al quebrar la salud de las instituciones (transparencia, control), distorsionan la calidad democrática en la toma de decisiones. A esas distorsiones apuntan algunas de las metáforas políticas de mucho tráfico en los medios y, todo sea dicho, desigual calidad conceptual: capitalismo de amiguetes, puertas giratorias, casta, élites extractivas.

En realidad, dirán algunos, se trata de asegurar que el mercado funcione de la mejor manera. No podemos ignorar que, en competencia perfecta, no hay lugar para el poder despótico y arbitrario que rige el trato de muchas empresas —y más en las pequeñas que en las grandes, por cierto— con los trabajadores, un trato que funciona sobre el transfondo del chantaje del hambre, para decirlo en corto y a la manera cervantina. El empresario siempre puede amenazar con despedir, pero, en un mercado impecable, el despido deja de funcionar como una amenaza puesto que el trabajador puede encontrar inmediatamente otro trabajo en las mismas condiciones. Pero, claro, los mercados impecables solo se encuentran en

los libros de economa. En la vida que conocemos el chantaje funciona a diario y la humillacin es un hbito de negociacin. As las cosas, para allanar el camino a la autonoma de los ciudadanos, a la posibilidad de que, sin ser hroes o santos, se puedan mirar al espejo sin indignidades y a los dems conciudadanos de frente, para decirles «no», quiz resulten ms realistas medidas *ex ante* que intentan dotarlos de recursos o poder de negociacin o de decisin.

DE LA DISTRIBUCIN A LA LIBERTAD

El cambio en la mirada sobre la igualdad supone un cambio de perspectiva pero sobre todo una ampliacin del foco. Algo de agradecer, siquiera porque las reflexiones igualitarias de la izquierda acadmica —con la deprimente excepcin de los trastornos derivados del multiculturalismo, de un flojera intelectual anodante— parecan agotarse en la justicia distributiva. Agotarse y agotarnos, porque su grado de sofisticacin analtica solo era comparable a su irrelevancia prctica. Los matices eran tantos, y tan retorcidos, como escasa la posibilidad de que se pudiera sacar algo en claro a la hora de cuajar en propuestas polticas. Las musas nunca parecan querer llegar al teatro. Y cuando llegaban, como suceda con las medidas bienestaristas, no era seguro que fuera para bien, como se acaba de ver.

Ahora la mirada se ampla y, en ese sentido, se entronca ms genuinamente con el ideario completo de la Revolucin Francesa. El nfasis recae en la democracia y, por implicacin, en el poder poltico. La distribucin es relevante, pero lo es, por derivacin, porque hace posible el autogobierno de los ciudadanos, su libertad, porque como deca Jefferson «la dependencia engendra servilismo y venalidad» (y, de ah, su propuesta, incluida en su borrador de la Constitucin de Virginia de 1776, de provisin mnima de tierra para todos los ciudadanos con derecho al voto).

La tesis del autor principal de la Declaracin de Independencia est sostenida por buena investigacin. La eleccin, tambin entre modos de vida, requiere ciertas condiciones y circunstancias, porque hay condiciones y circunstancias que hacen imposible

la buena elecci3n. Algunas resultan obvias: no podemos dar por buena una elecci3n de quien est? sometido a un chantaje, a una amenaza, bajo los efectos de una droga o es v?ctima de un lavado de cerebro. A poco que afinemos las condiciones de elecci3n, no tardaremos en encontrarnos con otras exigencias que, con m?s o menos nitidez, han tomado cuerpo en nuestras constituciones como garant?as de derechos y libertades. Y hay algunas m?s, no menos razonables, que, poco a poco, comienzan a estar presentes, siquiera germinalmente, como fuente de inspiraci3n de muchas leyes: la calidad de la informaci3n disponible, el conocimiento de los diversos modos de vida, o la ausencia de dominaci3n, la imposibilidad de que otra persona —mi pareja, mi jefe— pueda, por ejemplo, empeorar mis condiciones de vida si no le gusta lo que pienso o decido. Entre esos requisitos, m?s pronto que tarde, acaban por aparecer las condiciones materiales, la autonom?a econ3mica, pues como dejara dicho otro de los padres fundadores, John Adams: «Los hombres, en general, de cualquier sociedad, que est?n totalmente despose?dos de tierra conocen tan poco los asuntos p?blicos que no pueden opinar rectamente, y dependen tanto de otros hombres que carecen de una voluntad propia. Hablan y votan tal y como les recomienda alg?n hombre rico que ha moldeado sus mentes para que defiendan sus intereses de propietario». A Adams, ese argumento le serv?a para defender el voto censitario, a otros para defender una propiedad m?nima (*Forty acres and a mule; Three acres and a cow*) como garant?a de la libertad republicana. En todo caso, cabalmente entendido, supone una radical defensa, en nombre de la democracia, de la igualdad o, por lo menos, de unas garant?as econ3micas que les permiten tomar sus decisiones sin estar sometidos a la voluntad arbitraria de ning?n poder, a pensar con limpieza sin temor al chantaje de sus conciudadanos o a exigencias de afiliaci3n a comunidades culturales que, a cambio de sost?n material o psicol3gico, reclaman afiliaciones a identidades colectivas, como es com?n en grupos religiosos o nacionalistas. El cambio de orientaci3n supone, para empezar, aliviar la obsesi3n por «determinar el nivel de responsabilidad» cuando discutimos sobre la igualdad. Y quien dice responsabilidad, dice un racimo de ideas vecinas que aparecen a la hora justi-

ficar los criterios de distribuci3n: el m?rito, el esfuerzo, la mala (o buena) suerte no elegida. Para la nueva perspectiva, para formularlo de un modo extremo, la buena sociedad no viene determinada por la buena distribuci3n, sino al contrario, es la idea de buena sociedad la que decide la buena distribuci3n. La idea de que la buena sociedad se acaba en acotar esfuerzos y aportaciones no es nueva. Sin ir m?s lejos, en su *Cr?tica al Programa de Gotha*, Marx consideraba que la distribuci3n seg?n el criterio de «proporcional a lo que cada cual ha rendido», aceptable circunstancialmente, deber?a dejar lugar a otro, ya genuinamente comunista: «De cada cual seg?n sus capacidades, a cada cual seg?n sus necesidades». No es nueva y, tampoco, una extravagancia radical. Rige buena parte de nuestra vida familiar, donde nadie se pregunta por la productividad de ni?os o ancianos.

La perspectiva democr?tica no llega tan lejos. No nos dice que, al distribuir, debemos olvidarnos completamente de la mala suerte (la enfermedad, un terremoto), del esfuerzo o, en general, de la responsabilidad, sino que tales criterios deben ponderarse o, directamente, subordinarse a otras consideraciones. Sencillamente, reordena las preferencias: la igualdad es importante porque importan cosas como la democracia y la libertad. No se trata tanto de establecer como norte exclusivo la distribuci3n igual de los recursos o de compensar la mala suerte como de asegurar que los ciudadanos participan de las decisiones como libres e iguales. Con esa apuesta como prioridad, debemos explorar aquellas formas de distribuci3n que resultan compatibles con el buen funcionamiento de una sociedad en la que todos los ciudadanos son merecedores de igual aprecio y respeto y de la que nadie se siente excluido. Desde esa perspectiva, el problema de la desigualdad no es solo, y acaso no fundamentalmente, que unos pueden disfrutar de bienes que a otros les resultan inaccesibles, sino que esa desigualdad afecta a ?mbitos en los que nos importa mucho la igualdad.

Y es que la desigualdad, adem?s de suponer ineficiencias y despilfarros, por ejemplo de talentos, de un capital social que no se asigna de la mejor manera, socava la calidad de la democracia. La socava, por supuesto, porque cuando hay dependencia material, hay terreno abonado para la corrupci3n, el clientelismo, los votos

cautivos y, por ende, para erosionar el control y la transparencia de las instituciones. Pero la socava, sobre todo, en lo que constituye su rasgo m?s constitutivo: la igual posibilidad de influencia pol?tica en las decisiones colectivas, esa que t?midamente captura el lema «un ciudadano, un voto» y que se ve completamente pervertida cuando unos, los ricos, tienen una desorbitada capacidad para decidir lo que se juzga importante, los problemas que se discuten y las respuestas que aparecen —y las que se excluyen— en los debates. No solo eso, lo peor es que los excepcionalmente ricos son hiperactivos pol?ticamente. Y se entiende: si te hacen caso, participas. Por lo mismo, se explica que los de abajo se aboquen en una espiral de apat?a pol?tica: nadie habla cuando sabe que su voz no ser? atendida. El resultado es que los problemas de los ricos acaban por ser los problemas del gobierno y, por tanto, el norte que rige la orientaci?n de los gastos p?blicos. Se mire desde donde se mire (al investigar puertas giratorias, actividades legislativas, gasto en grupos de presi?n, composici?n de organismos de decisi?n), el diagn?stico es el mismo: la met?stasis afecta al organismo entero, la perversi?n de los principios de igualdad que sostienen la democracia; la quiebra de la argamasa com?n que da sentido a la actividad pol?tica; la sobrerrepresentaci?n de los intereses de los muy ricos y, como consecuencia de esa desigualdad, la esterilizaci?n —en el uso real— de los derechos, consecuencia de la desidia de unos ciudadanos que no se sienten escuchados y que, por lo dem?s, salvo excepciones, tampoco muestran mucho coraje ni limpieza mental cuando toman la palabra, dada su carencia de autonom?a material. De todo ello, contado aqu? a u?a de caballo, hay sobradas pruebas en distintos estudios acad?micos.

UN PATRIMONIO COM?N: LA LIBERTAD (REAL) DE TODOS

As? las cosas, las garant?as econ?micas de los ciudadanos se contemplan como parte de la trama institucional que hace posible el ejercicio del autogobierno. Una trama que no es, en lo esencial, distinta de otras que conocemos bien y nadie discute: las constituciones, que aseguran derechos y libertades, y un ecosistema de bie-

nes, p?blicos y privados, normas sociales y pautas culturales compartidas. Como han descubierto de la peor manera los pa?ses en los que se ha querido exportar la democracia como quien introduce el uso de la penicilina, la existencia de ese trama es condici?n de posibilidad del ejercicio de la ciudadan?a. En realidad, la penicilina es un buen ejemplo porque, tambi?n en su caso, sucede algo parecido a lo que pasa con ciertas «medidas de democracia», a saber, que, a solas, empeoran la cosas: en una poblaci?n en los l?mites de subsistencia, proporcionar una ayuda m?dica que acabe con la mortalidad infantil puede ocasionar m?s sufrimiento que el que pretende aliviar, al propiciar excesos de poblaci?n y hambrunas, como bien sab?an los padres que en el Chad en 1974 que, seg?n informaba *Newsweek*, imploraban a los funcionarios de NN. UU. que dejaran de enviarles medicinas, porque casi era mejor para sus hijos morir de difteria que seguir pasando hambre o crecer con da?os mentales producto de la malnutrici?n.

Pero hay algo m?s, que conviene recordar ante ciertas cr?ticas muy comunes a la renta b?sica (RB, en los sucesivo): esa trama se recibe sin m?rito ni aportaci?n por parte nuestra. Es un costoso legado, condici?n de posibilidad de la participaci?n en las decisiones colectivas, que recibimos con nuestra venida al mundo. Est? a disposici?n nuestra, sin haber contribuido a levantarlo ni a mantenerlo y, adem?s, sin que quepa excluir a nadie ni se contemple la desigualdad de acceso. En ese sentido, nuestras instituciones democr?ticas guardan no pocos paralelos con la disponibilidad de ciertos recursos naturales: «estaban ah?» antes que nosotros lleg?ramos al mundo. Y tambi?n como sucede, o debiera suceder con tales recursos, su disfrute resulta accesible a todos por igual con independencia de nuestra (inexistente) contribuci?n (de hecho, se ha sostenido —como se ver? en las p?ginas de este libro— que tales recursos deben ser la fuente de financiaci?n de la RB, aunque ahora se trata de otra cosa: de recordar que hay bienes de los cuales disfrutamos incondicionalmente, por igual, y que nos parece razonable que as? sea).

Las instituciones pol?ticas, y la trama en la que se insertan, no est?n dadas por la naturaleza, pero s? son de todos, bienes p?blicos producidos a trav?s de generaciones mediante la cooperaci?n

entre ciudadanos. Merced a ese legado y, ahora s?, de unos recursos naturales que tambi?n heredamos, realizamos, entre otras cosas, nuestras actividades productivas. Algo que, por cierto, a veces desatienden quienes vinculan incondicionalmente la igualdad justa a la aportaci?n productiva: ese paisaje de fondo de bienes heredados, que nosotros disfrutamos, tambi?n forma parte de los materiales que hacen posible nuestra riqueza y, por definici?n, disponemos de ?l sin aportar, sin m?rito ni esfuerzo.

El acceso a esa herencia no se parece al acceso a nuestras propiedades particulares. Esta circunstancia nos remite a un aspecto del ideario de la Revoluci?n Francesa con el que abrimos estas p?ginas. Aunque la propiedad pueda cumplir funciones —por ejemplo, proporcionarnos autonom?a— parecidas a los derechos de ciudadan?a, la condici?n de ciudadano nada tiene que ver con la de copropietario (de una parte) de la comunidad pol?tica. Nuestra condici?n de ciudadanos no est? vinculada a nuestra (posible) condici?n de propietarios. No somos ciudadanos como somos accionistas de una empresa o propietarios de una parcela en una urbanizaci?n. El territorio pol?tico no es una sociedad an?nima, ni un contrato entre partes, entre socios que aportan cada uno su parcelita. Yo soy tan ciudadano, como sujeto de derechos, en Madrid como en Sevilla. Y Barcelona, en tanto territorio pol?tico, no es propiedad de los barceloneses. Es la radical novedad de las revoluciones democr?ticas respecto a lo que suced?a en el Antiguo R?gimen, cuando los reyes eran due?os «a t?tulo personal» de sus territorios, que se ampliaban o menguaban con matrimonios y separaciones, como nos sucede a cada uno con nuestras propiedades.

Las comunidades pol?ticas que se forman con las naciones pol?ticas constituyen una empresa colectiva de la que los conciudadanos son copropietarios en un r?gimen de pro indiviso: todo es de todos sin que nadie sea due?o de nada en particular. No hay nada que sea «m?o» antes de lo que es de todos: el territorio pol?tico. La propiedad de cada cual no es previa, sino posterior, en sentido l?gico y emp?rico, al territorio com?n, jur?dico y pol?tico. La existencia de este territorio pol?tico-jur?dico previo hace posible que uno pueda disponer de su propiedad, comprarla o venderla y limitar el acceso o la disponibilidad a los dem?s. Puede hacer algunas cosas como

esas, pero no otras, como alojar su cuchillo en la yugular de otra persona. Incluso es anterior al *omnia sunt communia* («todo es de todos») de Tomás de Aquino, incorporado en cualquier cuerpo constitucional, en nuestro caso, en el artículo 128.1: «Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general». El artículo es tan solo la confirmación de que es una decisión de todos disponer de la trama de derechos: por razones de interés o necesidad, se modifica la disposición de la propiedad.

Sobre ese transfondo del territorio común tomamos decisiones políticas de modo compartido, en una unidad de justicia y de decisión, en la que, idealmente, todas las voces son atendidas y, precisamente porque son atendidas, de acuerdo con procedimientos democráticos, y recogidas en forma de leyes, que contemplan la posibilidad de su modificación a la luz de nuevas razones, no cabe desvincularse de su cumplimiento o, por ejemplo, amenazar con «romper las reglas» y marcharse con una parte, si no nos gustan las decisiones. La igualdad, la libertad y la fraternidad adquieren su exacto sentido sobre el fondo de la unidad: si yo amenazo con romper la unidad cuando no me gusta lo acordado por todos, si el chantaje y la imposición sustituyen a la deliberación y las razones, no hay igualdad entre ciudadanos, porque quiero que mi voz pese más que las otras, ni libertad, porque la amenaza quiere regir las decisiones de todos, ni fraternidad, porque desprecio las razones —y hasta la posibilidad de dar razones— de mis conciudadanos. De ese patrimonio común, que incluye derechos y libertades, participamos todos por igual y a todos por igual nos proporciona las condiciones materiales para el ejercicio pleno de los derechos, de la libertad y la participación. Y está ahí, en el mundo, antes de que nosotros lleguemos al planeta sin que quepa atribuírselo a nadie en particular. Por eso mismo, porque somos partícipes sin mérito ni voluntad, uno no se «apunta» a la nación política como se hace socio de un club deportivo. Si quiere, por supuesto, se puede marchar, pero su marcha deja intacta a la comunidad política, sin que le quepa reclamar «su parte». En ese sentido, presenta características de bien público más o menos puro: no hay modo de excluir a nadie de su uso y el acceso de uno no limita el acceso de otros. Nos

viene dado, gratuitamente, si queremos decirlo as y sin que quepa pedirnos cuentas, ni limitar o dosificar nuestra posibilidad de disponer de l, segn nuestra particular contribucin. Aunque s debemos rendir cuentas compartidamente para legarlo sin deterioro, sin quebrarlo, precisamente porque formamos parte de una comunidad que nos garantiza derechos y libertades y en la que nuestra voz cuenta como la de cualquier otro ciudadano: es nuestra herencia comn y esa herencia, que con nuestra participacin hemos cultivado, debemos dejarla en las mejores condiciones.

LA RENTA BSICA: UN INSTRUMENTO

Para muchos, la RB es una propuesta realista que atiende a las consideraciones anteriores. En tal caso se entendera como un (otro) derecho de ciudadana que se materializa en una prestacin monetaria universal, individual e incondicional y permanente. La novedad ms importante, frente a otras propuestas, es que la reciben individuos (no las unidades familiares) y todos los individuos, con independencia de su situacin (desempleo, edad, salud, etc.). Algo bastante natural si se entiende como un derecho y aparece, como en las lneas anteriores, vinculada a conceptos como libertad, autonoma y autogobierno.

De ms est decir que la RB se puede defender mediante otras estrategias de fundamentacin distintas de la aqu sistematizada, desde otras ideas de buena sociedad. Por otra parte, a partir de los principios aqu invocados, tambin cabra argumentar en favor de propuestas alternativas, distintas de la RB. Al menos, en principio. Uno puede ser vegetariano por razones diversas (religiosas, gastronmicas, ticas, dietticas) y, tambin, por los mismos principios (dietticos, por ejemplo) puede optar por alternativas al vegetarianismo. En el caso de la RB ha sucedido algo parecido. Ha sido defendida por liberales de distintos apellidos, por libertarios y por socialistas radicales o igualitaristas. Tambin cabe optar por defensas ms austeras, con menos vuelo filosfico, que prescindan —al menos explcitamente— de armazones de teora poltica ms o menos elaborados y opten por itinerarios ms sen-

cillos que los aqu? recorridos, como una simple medida contra la pobreza, la exclusi3n o el desempleo.

Con todo, no hay que exagerar los consensos. Las discrepancias de perspectiva, m?s temprano que tarde, acaban por manifestarse como discrepancias en aspectos importantes de la RB: la cantidad a percibir, la edad en la que se inicia, las fuentes y formas de financiaci3n, la exigencia de eliminar todas las dem?s transferencias. Y, por supuesto, no faltan enmiendas generales que, por lo general, dudan de su realismo. En varias direcciones: la posibilidad de financiar una renta que pudiera estar a la altura de los objetivos, en particular, de asegurar la autonom?a material; la compatibilidad con nuestras intuiciones morales, con extendidas opiniones en contra de que se pueda cobrar «sin dar un palo al agua» o de que los ricos tambi3n reciban la RB; la posibilidad de que se desencadenaran comportamientos que hicieran insostenible la RB, como legiones de par?sitos y de gorriones; los apoyos pol?ticos de la ciudadan?a, acerca de la (im)posibilidad de encontrar el suficiente n?mero de segmentos sociales dispuestos a respaldarla electoralmente.

Todas esas dudas, a mi parecer, tienen su r3plica, al menos en sus versiones m?s primitivas, las m?s extendidas en la opini3n p?blica. Respecto a su coste, no est? de m?s recordar que la RB sustituye a muchas de las actuales transferencias, simplifica —y por ende abarata— las labores de gesti3n y vigilancia y, aunque siempre resulta complicado anticipar sus efectos din?micos, no cabe descartar mejoras en productividad derivadas de varios mecanismos causales previsiblemente asociados a la aplicaci3n de la RB: la previsible tecnificaci3n de unos trabajos hasta ahora sostenidos en mano de obra sin cualificar que se ve obligada a aceptar salarios miserables; mejoras en capital humano de quienes desprovistos de ingresos ten?an que entregar su tiempo a «lo primero que salga»; disminuci3n de incertidumbre que invita a decisiones menos arriesgadas, etc.

En segundo lugar, no est? fuera de dudas que a todos nos parece mal que la gente reciba dinero sin contrapartida laboral. Por lo pronto, no parece que nos revuelva las tripas morales la situaci3n contraria —que es, en muchos casos, su reverso—, esto es, que las personas trabajen sin esperar retribuci3n, como sucede con el tra-

bajo dom?stico o el voluntariado. El problema, en buena medida, es el prisma con el que se abordan las valoraciones. En realidad, como tal, que alguien disfrute de ciertas cosas «sin aportar» no lo vemos necesariamente mal. Nos sucede a todos, especialmente si venimos al mundo en esta parte del planeta, en su lado bueno, y lo aprobamos, a diario, en el caso de ni?os, ancianos y, de vez en cuando, ante cat?strofes como hambrunas o desastres naturales. Tambi?n, por lo que muestran los estudios, a los humanos nos parece bien que las personas tengan satisfechas ciertas necesidades b?sicas con independencia de su aportaci?n. Por lo dem?s, las intuiciones morales no est?n escritas en las tablas de la ley y, en el fondo, cuando le damos dos vueltas a muchas de nuestras opiniones e intentamos dotarlas de cierta coherencia, acabamos por corregir nuestras convicciones m?s arraigadas, como nos lo recuerdan conquistas como el sufragio universal, los derechos civiles, la presencia p?blica y pol?tica de la mujer, el trabajo infantil, el matrimonio homosexual o los derechos de los animales.

Tambi?n resulta discutible, a la luz de distintas modelizaciones te?ricas con supuestos razonablemente realistas basadas en agentes con diferentes patrones de comportamientos (fan?ticos del trabajo, ociosos impenitentes, trabajadores que condicionan sus decisiones a las conductas ajenas, etc.), de los experimentos naturales disponibles (loterías que premian con sueldos vitalicios, como el sueldo Nescaf? o de pol?ticas aplicadas que guardan parecidos a la RB (dividendo social en Alaska, impuestos negativo en diversos lugares), que la gente vaya a dejar de trabajar generalizadamente. Es cierto que resultados tan limitados en su alcance deben tomarse con la debida prudencia, pero no est? de m?s recordar que, a diferencia de lo que sucede con otras prestaciones (como el seguro de desempleo), la RB no se pierde cuando se consigue un empleo, de modo que el salario sigue resultando un acicate, que las sanciones morales e influencias sociales (un entorno susceptible de ser configurado p?blicamente y que permite modificar nuestras disposiciones a cooperar, imitar, a esperar reciprocidades) pueden orientar los comportamientos y que vincular el nivel (fluctuante, como variable dependiente) de la RB a la recaudaci?n tributaria puede facilitar su aceptaci?n: «Esto es lo que

podemos dedicar a la RB dadas nuestras posibilidades —y disposiciones— tributarias».

Por ?ltimo, el respaldo pol?tico en buena medida depende, como sucede con las apreciaciones morales, de la manera en la que la RB se presente, del relato en el que se inserta; dicho, de otro modo: el respaldo se sitúa en el territorio de la disputa pol?tica, en el debate sobre los principios de justicia socialmente compartidos y en el modo en el que las propuestas aparecen en relaci?n con esos principios. Ciudadanos favorables al impuesto de sucesiones cambian de opini?n cuando se lo bautiza como «impuesto de muerte». Preferimos gastar en «ayudar a los pobres» que «en bienestar», en «tratar la adicci?n a las drogas» que en «rehabilitar drogadictos», en hacer frente «al calentamiento global» que al «cambio clim?tico». Por otra parte, la aceptaci?n tampoco es independiente de la secuencia temporal de presentaci?n. No es impensable y se ha pensado (J. A. Noguera habla de m?dulos), en una sucesi?n que, mediante la modificaci?n o, en su caso, generalizaci?n de algunas transferencias existentes (prestaciones a menores, pensiones universales) aceptadas y apreciadas por los ciudadanos, de a poquito, permita desembocar *de facto* en la RB, atendiendo a la sabia consideraci?n de Goethe seg?n la cual, «cada paso ha de ser en s? mismo una meta, sin dejar de ser paso».

De m?s est? decir que las r?plicas no agotan un debate que permanece abierto y en el que han participado cient?ficos sociales de primera l?nea, en muchos casos para modificar sus juicios a la luz de razones que hab?an desatendido en una primera aproximaci?n. Nada que ver, por tanto, con el trato fr?volo que la RB ha recibido en nuestro entorno pol?tico m?s inmediato en donde no ha habido deshonestidad intelectual que no se haya cometido. Defensas a tontas y a locas, brindis al Sol del que se sabe alejado de las decisiones reales, elogios insensatos, como si fuera el b?lsamo de fierabr?s que aliviar? todos los males sociales, manipulaci?n de las palabras para llamar RB a otras cosas, propuestas de alcance geogr?fico tan limitado que parec?an reducirse a —donde, por supuesto, no habr?a problemas de aplicaci?n— falansterios o familias ampliadas, apolog?as ret?ricas en ?mbitos en donde no hay posibilidad real de aplicaci?n y, al poco tiempo, a la menor cr?tica y

cuando la pol?tica empieza a exigir decisiones reales, eliminaci3n discreta de los programas.

Con todo, las malas discusiones han contribuido a que, de la peor manera, en rigurosa aplicaci3n de la recomendaci3n «que se hable de m?, aunque sea mal», la RB est? ya en el debate pol?tico y, unos y otros, aunque no siempre de frente, la est?n discutiendo, aunque sea tangencialmente, con propuestas que se quieren parecer o se presentan como alternativas. Sencillamente, la RB est? para quedarse. Y debe quedarse, mientras no veamos razones definitivas que nos inviten a darla por caducada. Porque, ante todo, tambi3n ahora, se trata de acudir con la mirada limpia, dispuestos a admitir que pueden aparecer dificultades hasta ahora no anticipadas, efectos imprevistos. Sin desgarros y con vocaci3n de verdad. Despu3s de todo, no debemos olvidar que no deja de ser un instrumento para los empe?os que realmente importan, aquellos que estaban en la trastienda de un verano de 1789 en Par?s y a los que todav?a les estamos dando vueltas, aunque no lo dijera Zhou Enlai. Como sucede con cualquier instrumento, quiz? nos toque abandonarlo, si no nos sirve o si encontramos m?s afinados, si hay otros que se ajustan mejor a la funci3n para la que han sido designados. En todo caso, lo importante es que los primeros pasos sean los debidos. Para eso, para empezar a saber de qu3 va, nada mejor que la excelente sistematizaci3n que el lector tiene entre sus manos.

El lector est? a punto de iniciar la lectura de un libro infrecuente: una presentaci3n informada y accesible que evita el humo de los buenos deseos y las malas artes de la descalificaci3n de la discrepancia. La exposici3n comedida de quienes saben de qu3 hablan y, sobre todo, saben contarlo de manera sencilla sin malbaratar con vacua ret3rica la propuestas ni escamotear ni manipular los argumentos contrarios. Podr? comprobar que ideas poderosas y profundas se pueden explicar con la m?xima claridad. En las p?ginas que siguen encontrar? perfilada la idea de la RB, su genealog?a y la naturaleza exacta de su novedad, sus diferencias con otras propuestas en apariencia semejantes, las experiencias disponibles y lo que podemos aprender de ellas, las consideraciones econ3micas y ?ticas acerca de su viabilidad y su justificaci3n, las diversas alternativas de financiaci3n y lo que cada una de ellas implica,

las distintas maneras de valorar la propuesta y lo que razonablemente cabe esperar de su aplicaci3n. Sin trampas, sin esconder las dudas, ni pretender que con la RB se acabaron los males del mundo. Quien no haya tenido otra informaci3n sobre la RB que la que ha podido encontrar en nuestros medios de comunicaci3n o en los debates pol?ticos, despu3s de comprobar la escasa pertinencia de la mayor parte de las cr?ticas —y de muchos elogios— que han acompa?ado a la aparici3n p?blica de la RB, ver? que no estamos ante una ocurrencia de asamblea sino ante una propuesta avallada por investigaciones que no se despachan con desplantes y sentencias tabernarias. Quiz?, quiero consolarme, tambi3n caiga en la cuenta de que no todas las reflexiones de los fil3sofos pol?ticos son especulaciones ociosas y de que no tenemos porque abandonar la vieja confianza ilustrada en que la raz3n y la buena ciencia constituyen el mejor punto de partida para ordenar con m?s decencia la vida compartida. El rengl3n torcido de Zhou Enlai, la m?s duradera herencia de un verano de 1789 en Par?is.

REFERENCIAS

- Barragu3, Borja, *La garant?a de ingresos m?nimos en el igualitarismo (p)redistributivo*, Tesis doctoral, Universidad Aut3noma de Madrid, 2015.
- Noguera, Jos3 A.; De Wispelaere, Jurgen; Widerquist, Karl; Yannick. Vanderborght, (eds.), *Basic Income: An Anthology of Contemporary Research*, Londres, Wiley-Blackwell, 2013.
- Ovejero, F3lix, *Proceso abierto. El socialismo despu3s del socialismo*, Barcelona, Tusquets, 2005.
- Queralt, Jahel, *Igualdad, suerte y justicia*, Madrid, Marcial Pons, 2014.
- Red Renta B?sica, la secci3n espa?ola de la organizaci3n internacional Red Global de la revista b?sica ofrece una completa, accesible y actualizada informaci3n sobre la renta b?sica:<http://www.basicincome.org/>; <http://www.redrentabasica.org/rb/>.
- Sin permiso*, revista digital que tambi3n ha publicado, adem?s de interesantes debates, distintos vol?menes monogr?ficos accesibles desde: <http://www.sinpermiso.info/>.